

EL UNIVERSAL

Los Militares Argentinos han Asesinado a 12 Clérigos

- ★ 17 Desaparecidos, 14 Presos y 12 Expulsados
- ★ Quizá También Mataron al Obispo Angelelli
- ★ Pastoral del Episcopado Condenando la Barbarie

Por FERNANDO MERAZ,
Enviado Especial

BUENOS AIRES, 12 de noviembre de 1976. — Sombras asesinas, no identificadas nunca, pero amparadas siempre con uniformes militares, credenciales de la Policía Federal Argentina y vehículos sin placas, se encargaron de dar muerte, a partir del 24 de marzo a diez sacerdotes católicos y a dos seminaristas; de secuestrar y desaparecer a diecisiete; de llevar a prisión a catorce; de deportar a cuatro y obligar al exilio a ocho.

El pueblo argentino los culpa también, de haber consumado el millones de dólares otorgados por ¿Qué cambiará bajo Carter? Er verdad que una nación, incluso tiene las manos enteramente lib mismo, se va a cambiar el estilo y Para empezar, frente a Europa sentimental, más pro europeos qu estarían tentados de decir: más in un caso especial. De su escritor "Comisión Trilateral", organizaci de Nueva York David Rockefeller Unidos, Europa y Japón. Carter política extranjera, de origen pol Columbia. Brezinski podría bien se de Seguridad, como lo hizo Kissin setenta prelados argentinos asis tentes a la Conferencia Episcopal, que concluyó el pasado treinta y uno de octubre, para ser leída en todas las iglesias y capillas del país el primer domingo de adviento de 1976.

"No podemos —dicen— olvidar a aquellos hermanos que buscan un nuevo estado de cosas a través de la violencia y la subversión".

Y ponen en evidencia la crisis social que vive el país cuando discretamente recomiendan:

"Para alcanzar la paz y la libertad, deben aunarse esfuerzos y cobrar vigencia la justicia".

La ausencia del derecho, de la justicia social, de la libertad, del respeto y de la tranquilidad que priva en el país argentino se advierte en la parte sustancial del documento:

"Oraciones por la paz y la concordia del país.

"Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo argentino anhela vivir en paz, en orden y en libertad, y es claro también que para lograr esos objetivos, es imprescindible aunar esfuerzos y hacer que cobren plena vigencia los valores de

la justicia, de una convivencia económica-social equilibrada, y de una auténtica armonía fraterna".

Los prelados se habían reunido en la conferencia episcopal, presidida por el obispo de Buenos Aires, monseñor Rafael Primatesta, "para examinar la biblia latinoamericana".

LOS ATROPELLOS A LA IGLESIA

Identificada en buena parte con los problemas sociales del país, desde los últimos diez años, la Iglesia argentina fue, por lo menos en las provincias, un obstáculo contra la represión de los militares.

Obispos y sacerdotes se apresuraron a denunciar la violencia, el crimen, la tortura y las vejaciones de que los sistemas castrenses hicieron víctima al pueblo.

En la provincia de La Rioja, el obispo, monseñor Enrique Angelelli, pronunció el domingo 21 de marzo, tres días antes del golpe militar, una homilía en la que condenaba el cuartelazo que ya se avecinaba.

Dijo entonces el obispo Angelelli: "La Iglesia de La Rioja, no podría ver con buenos ojos un golpe militar, porque un golpe sería, más que nada contra el pueblo".

Pero su santidad de muerte la escribió cuando, una semana más tarde, dirigió a todos sus párrocos y vicarios una exhortación para "no celebrar misas en cuarteles militares".

Todos los curas de la diócesis se solidarizaron con él, pero hubo algunos, por temor, más que nada, que lo desobedecieron. El provicario castrense, obispo Bonamin, fue uno de ellos.

El comandante del ejército en La Rioja le pidió a monseñor Angelelli que oficiara una misa en la base militar de la Fuerza Aérea en Chamicani.

Angelelli se negó.

Pero Bonamin, en cambio la ofició.

Comenzaron los militares por tratar de intimidar a Angelelli.

El 29 de marzo por la madrugada, las vías del ferrocarril de Chadañar, a pocos kilómetros de Chamicani, dos cadáveres envueltos con mantas del ejército.

Cuando se acercaron, identificaron al párroco y al presbítero del pueblo. Gabriel Longville y Juan de Dios Murias. Los dos habían sido salvajemente torturados. Los cadáveres estaban mutilados. Junto a ellos, los verdugos militares habían dejado una lista de otros veinte sacerdotes. Todos habían sido condenados a muerte.

Cuando se iniciaron las investigaciones, la intervención del ejército fue clara. Quince días antes una partida militar asesinó a tiros al líder campesino Wence. Su mujer dijo que cuando se lo llevaron preguntaron: ¿Dónde están los curas?

El día de los hechos, los dos sacerdotes cenaban en el convento aledaño a la casa parroquial. Llegaron dos individuos que se identificaron con credenciales de la Policía Federal. Cuando los religiosos salieron, les pidieron acompañarlos.

—Es solamente para que identifiquen a unos detenidos, dijeron.

Esa noche, campesinos del lugar dijeron haber escuchado gritos y risotadas. También afirmaron haber escuchado disparos, pero dijeron confundirlos con cazadores furtivos, frecuentes en esa región.

ASESINAN AL OBISPO

Monseñor Angelelli al tener conocimiento de la muerte de sus vicarios decidió viajar hasta Chadañar, para estar presente, personalmente en las investigaciones del crimen.

Monseñor Angelelli estaba considerado como uno de los obispos más progresistas de la América Latina. Su postura, en desacuerdo definitivo con el gobierno de la Junta Militar le había granjeado la mala voluntad de las autoridades castrenses, pero también el apoyo incondicional del pueblo argentino, uno de los más católicos del continente.

Angelelli había sido invitado a la Conferencia de Obispos de Riobamba, Ecuador. En su lugar fue monseñor Zaspé, obispo de Santa Fe.

El tres de agosto, después de haber elaborado un amplio informe sobre la muerte de los padres Longville y Murias, el obispo Angelelli, regresaba a La Rioja.

Testigos presenciales afirmaron haber visto a personas desconocidas en sospechosa actitud junto a la vieja furgoneta Fiat que el prelado

usaba para sus visitas.

Otros testimonios dieron cuenta de lo que habían presenciado la tarde del día tres de agosto en la carretera de Chadañar a La Rioja:

La Fiat verde en que viajaba el Obispo sólo fue alcanzada por un Ford Falcon negro y el camino fue cerrado por un Citroen gris, ambos sin placas. Y autos extraños en una comunidad pequeña como ésta en donde los automóviles se cuentan con los dedos de la mano.

Al llegar a la curva —dicen los campesinos que atestiguaron el hecho— el Falcon se cerró al paso del obispo. Este acorralado por el Citroen hubo de virar violentamente para evitar el encontronazo, perdió el control y se precipitó al vacío.

El obispo Angelelli murió desnudado.

Del automóvil desapareció "misteriosamente" su portafolios con el informe sobre el asesinato de los padres Longville y Murias.

El posterior examen de la furgoneta mostró que los ejes de la dirección habían sido cortados con una seguetta. De ello dio fe el Juez de la provincia.

Hasta la fecha, cuatro meses después, los investigadores no han rendido el informe del "accidente".

RAFAGAS ASESNAS

El nueve de mayo, el padre Carlos Mújica ofició una misa por Enrique Artigas, un villero —campesino— abatido a tiros por la policía durante una manifestación en la plaza de Mayo.

Artigas había caído, bañado en sangre, frente al MBS José Chejolan. Sus deudos imploraron al Padre Mújica que le oficiara una misa en su parroquia de San Francisco. Cosa que aceptó.

Dos días después, el 11 de mayo, cuando salía de la iglesia, el sacerdote cayó acribillado por las balas de metrallera nueve milímetros, disparadas por los ocupantes de un Peugeot, sin placas.

El sacerdote Mújica era conocido en todo Buenos Aires, por sus relaciones con los dirigentes obreros y campesinos y su liderazgo y compromiso con los marginados.

Una actitud igual mantenía en su parroquia el Padre José Tedeschi, quien, joven, fogoso, de treinta años de edad, se había caracterizado por sus afirmaciones en el sentido de

que la iglesia católica "está comprometida, antes que nada, con el pueblo".

Según había dicho a sus feligreses, muchas veces desde el púlpito "es el pueblo quien debe designar a sus gobernantes, toda imposición es ilegítima", aludiendo claramente al golpe militar.

El día dos de abril fue secuestrado de la calle, en su pueblo Villa Itatí, en Bernal por un grupo de personas armadas que se identificaron con credenciales de la policía federal. A nadie permitieron hablarle.

Cuatro días después unos campesinos lo encontraron con las muelas arrancadas, las uñas desprendidas, la carne viva, desollado el cadáver del sacerdote, con los ojos vaciados y castrado.

MUERE QUIEN HABLA POR EL PUEBLO

El día ocho de abril el pueblo rescató de las orillas del río de La Plata los cadáveres de dos delegados sindicales de los astilleros "Astarsa", que cuatro noches antes habían sido secuestrados por agentes de la Superintendencia Federal de Seguridad —policía política argentina— de Tigre.

La mujer de uno de ellos, también muerta, vejada y torturada era catequista en la capilla de Carupa. Su cadáver, desangrado, al ser encontrado, tenía un pecho arrancado.

Borracho, el comisario de la policía regional de Tigre, se jactó del hecho en una taberna, ante cientos de trabajadores:

— "Nosotros los jodimos, che, y así vamos a joder a los que estén jorobando al gobierno..."

Los mismos obreros de los astilleros fueron a decirlo al cura de la parroquia, el padre Francisco Soares quien al día siguiente, en la misa de ocho, lo denunció públicamente y condenó a los agentes de la policía, a quienes mencionó por sus nombres y, desde el púlpito demandó la intervención de las autoridades superiores "para poner fin a tanta barbarie".

La noche del día quince, salía el Padre Soares de su casa, arrastrando la silla de ruedas de su hermano inválido, de su casa parroquial en Carupá, diócesis de San Isidro.

Un automóvil "no identificado" pasó junto a ellos y los barrió con ráfagas de metralla.

El sacerdote murió instantáneamente. Su hermano días después.

LA VENGANZA ENFERMA

La parroquia de San Patricio se había convertido en lo que se llama "reducto de curas progresistas". Allí se ayudaba por igual a todos. Los curas se habían convertido en defensores de sus feligreses y más de uno habían sostenido violentas discusiones con capataces o con mili-

tares para disuadirlos de atentar contra el pueblo.

El domingo 27 de julio de 1976, el párroco, Alfredo Kelly en su homilía dominical afirmó que la pena de muerte, restaurada en la Argentina por la Junta Militar, era violatoria de los derechos humanos.

La medianoche del sábado 3 de agosto, vecinos del barrio vieron un automóvil Peugeot, negro, sin placas, estacionado frente al colegio parroquial de San Martín, en donde está la residencia del Padre Kelly y los vicarios, seminaristas y diáconos de la parroquia.

Como les pareciera sospechosa la actitud del automóvil, pidieron a los vigilantes de la policía municipal que los retiraran. Uno de los presidentes municipales fue a pedir la identificación de los ocupantes del Peugeot y estos le mostraron credenciales de la Superintendencia de Seguridad Federal. Se negaron a retirarse y explicaron "estamos haciendo un trabajo".

Al día siguiente los sirvientes se extrañaron porque nadie abría la casa. Uno de ellos entró por la azotea y se encontró a los sacerdotes Duffan, Leaden y Kelly, y a los seminaristas José Emilio Barletti y Salvador Barbeito, fusilados en sus habitaciones.

Todos los cuerpos mostraron señales de salvajes torturas.

Con una frase irrepetible, escrita sobre una alfombra con pintura de aerosol, los asesinos justificaron la carnicería:

"Por corromper las mentes de los jóvenes".

Ésas leyendas fueron borradas apresuradamente por la policía que acudió al día siguiente a dar fe de los hechos.

La mañana del domingo 30 de julio, en un "operativo de rutina" cien elementos de la Marina rodearon el sector del barrio de Rivadavia, del Bajo Flores e interrumpieron la misa dominical.

Hicieron salir a todos los presentes con las manos en alto. Luego detuvieron a nueve catequistas.

Armados con fusiles y metrallas, los marinos coparon la casa parroquial, se desplazaron sobre los techos y bloquearon las salidas. Parecía que buscaran un comando guerrillero.

A golpes y culatazos sacaron de la residencia a los padres Francisco Jalics y Orlando Yorio, jesuitas ambos. Después registraron la casa, rompiendo todo a su paso.

En la iglesia interrogaron a los sacerdotes sobre sus conexiones con el marxismo y la subversión.

Mientras tanto, los sacerdotes

fueron subidos a un automóvil, en tanto que los catequistas eran hacinados a un autobús que los llevó a la prisión instalada en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Allí todos fueron golpeados y torturados.

Una de las catequistas era sobrina del político Francisco Manrique, quien, informado de los hechos por los testigos hizo gestiones para que todas las catequistas fueran liberadas.

Sin embargo, de los sacerdotes nunca se supo. La Armada negó tenerlos en su poder, y lo mismo hicieron el resto de las policías.

Hasta ahora están perdidos.

Consagrada a la labor social, dedicada al trabajo entre los humildes y preocupada por la situación del país, la comunidad de La Sallette, en Córdoba vivía la misma situación que muchas otras comunidades religiosas del país.

Pocas semanas después del golpe militar, el ejército dispuso una acción para bloquear la casa y detener a todos los religiosos allí reunidos.

La mayor parte de los detenidos eran norteamericanos que vieron que ser liberados por los militares ante las presiones del obispado de Córdoba y la embajada norteamericana.

Sin embargo el gobierno militar ordenó la expulsión de toda la comunidad encabezada por el padre Santiago Weeks.

El episcopado argentino, en una carta dirigida al Presidente Videla denunció, además del asesinato de los padres Mújica, Tedeschi, Soares, Jalics, Yorio, Duffan, Leaden, Kelly, Longville y Murias y los seminaristas Barletti y Berbeito, "las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de monseñor Angelelli".

Y demanda la libertad de los padres: Musse, Testa, Martínez, Núñez, Nelio Rougier, Francisco González, Rafael Iacuzzi, Raúl Troncoso, José Czarspack, Silvio Liuzzi, P. Servin, Omar Dinelli, Luis L. Molina, Carlos A. Di Perto, Raúl Rodríguez.

Denuncia que fueron presos y sometidos a torturas los padres: Juan Dieuzeide, Víctor Pygnata, Juan Filippuzzi, Diego Orlandini, Jorge Torres, Jorge Galli, Raúl Acosta, Eduardo Ruiz, Cacho Meccam, Roberto Camicco, Roberto Croce, Paco Dalte-rech, Pablo Becker, Esteban Inestal, y Enrique Pérez.

Deportados, Santiago Revenet, Néstor García, Santiago Weeks y Julio García, y exiliados: Jorge Adur, José Rojas, Miguel Oblato, Juan José Palomino, Guido del Mestri, Enrique Kolki, Justino Necchi y Pablo Olagaray.